

Gestión pública y moral política

Juan Mora Heredia*

Raúl Rodríguez Guillén*

La ecuación dinero y política ha ido moldeando una percepción del quehacer público-estatal negativa, disociada de cualquier principio básico de servicio. Ser político o formar parte de la administración pública, para el conjunto de la población, es sinónimo de corrupción y abuso de poder. Pero lo sobresaliente de esta situación es que sin distingo de filiación política, derecha o izquierda, los profesionales de la política son asiduos actores de escándalos políticos. Algunos más documentados que otros, con mayor o menor seguimiento por parte de los *mass media*, pero con la constante de inspirar una imagen del político profesional cargada de mezquindad y ambiciones personales, misma que por obvias razones les ha significado ocupar los últimos niveles en la escala de confianza de los ciudadanos.

Hoy en día tanto en México como en buena parte de las sociedades del orbe se vive con el síndrome de los escándalos políticos. No falta la ocasión para que sea por televisión o a través de los diarios, que se tenga noticia de alguna maniobra abusiva por parte de los políticos en materia de dinero o del poder. De esta manera, la ecuación dinero y política ha ido moldeando una percepción del quehacer público-estatal negativa, disociada de cualquier principio básico de servicio. Ser político o formar parte de la administración pública, para el conjunto de la población, es sinónimo de corrupción y abuso de poder. Ciertamente hay los suficientes incidentes para alimentar esta imagen, sin embargo la existencia de algunos o varios casos no puede llevarnos a cali-

ficar esto como una generalidad, y mucho menos como una ley.

Pero lo sobresaliente de esta situación es que sin distingo de filiación política, derecha o izquierda, los profesionales de la política son asiduos actores de escándalos políticos. Algunos más documentados que otros, con mayor o menor seguimiento por parte de los *mass media*, pero con la constante de inspirar una imagen del político profesional cargada de mezquindad y ambiciones personales, misma que por obvias razones les ha significado ocupar los últimos niveles en la escala de confianza de los ciudadanos. Una condición de desafecho político expresada en abstencionismo electoral, apartidismo y formas de participación alternas a través de organizaciones no gubernamentales.

Pero si bien éste es un fenómeno mundial, es de subrayar que su mayor

incidencia se registra en los países de reciente cuño democrático como los de América Latina, donde sus habitantes manifiestan su desencanto hacia la institucionalidad política, pues se sienten defraudados de los políticos que prometieron grandes beneficios para todos, pero éstos al final parecen ser los únicos ganadores. Y un sentimiento de agravio se acrecienta cuando los políticos son exhibidos por los medios de comunicación disfrutando de la prosperidad que la mayoría no tiene. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tan estrepitoso desplome de una labor vital en la fabricación de los perímetros básicos de coexistencia social?

Tal punto es de peculiar importancia, luego de que después de las virulentas reformas de primera generación, cuyo principal eje recayó en las estructuras económicas, ha quedado un vacío de legitimidad respecto a los límites

* Profesores-Investigadores del Departamento de Sociología UAM-A.

y alcances de los actores participantes en la esfera política. De esta suerte, las reformas de segunda y tercera generación requieren no dejar en el olvido el tema de la ética política, proyectando su relevancia en los derroteros de la aún inconclusa reforma del Estado. La correcta resolución de este nexo necesariamente coadyuvará a estabilizar los márgenes de gobernabilidad de las incipientes democracias; en caso contrario, el desborde en la animadversión hacia actores e instituciones políticas fomentará el retorno de vocaciones autoritarias, o bien de liderazgos de dudosa calidad moral.

Y frente a todo esto, obligado resulta preguntarse si los políticos son por naturaleza corruptos. Tal interrogante conduce a recobrar una vieja discusión weberiana, supuestamente ya rebasada, pero que hoy día resurge con inusitada fuerza: la conexión entre ética y política que para Weber se cristalizaba en el perfil del político y su articulación con la rutina del poder.

A ese respecto, Weber destaca la existencia de dos tipos de políticos: “los que viven para la política o los que viven de la política”¹. Y si bien los dos pueden ser considerados políticos profesionales, el valor de esta tarea para uno y otro es diametralmente contrapuesto, ya que mientras los primeros hacen de este oficio “su vida en el sentido íntimo, o se solaza simplemente en el ejercicio del poder que conserva, o mantiene su equilibrio y la tranquilidad en su conciencia por haber dado un sentido a su vida al haberla puesto al servicio de algo”², los que viven de la política “se colocan en un nivel mucho más burdo, esto es, en el nivel económico. Aquel que vive de la política como profesión, pretende valerse de ella para convertirla en fuente permanente de ingresos”³.

De ahí pues, ¿las decisiones políticas y sus efectos, virtuosos o funestos, se justifican por la mera satisfacción individual que pueda tener el político profesional para realizar este acto?, o aquí estamos frente a una situación que con mucho supera las intenciones personales de los mismos. Para Weber, la solución a este dilema por principio se hallaba en las condiciones socioeconómicas de los participantes en la danza política. De esta forma, para garantizar una cierta objetividad en el uso del poder se requería que “la persona que así viva (para la política) debe contar con una situación económica independiente de aquellos ingresos que pueda percibir de la política”⁴. ¿Pero ello implicaría en-

tonces que los más aptos para gobernar serían los empresarios o aquellos con sobrada solvencia económica para evitar las tentaciones del dinero fácil? Esta pudiera ser la impresión que a primera vista motiva este planteamiento weberiano, pero que, sin embargo, contiene elementos de mayor profundidad. El fundamental, sin lugar a dudas, es la existencia de un propósito a lograr por parte del político, luego de que a éste “(al político profesional) se le plantea la cuestión acerca de cuáles son las cualidades que habrán de permitirle estar al nivel de ese poder, por más limitado que fuere en su caso concreto, y de la responsabilidad a la que le obliga. En este punto llegamos ya al plano de la ética, ya que es a ésta a la que corresponde determinar la categoría de hombre que se requiere para ser merecedor del derecho a poner la mano en la rueda de la historia”⁵.

Así, condición esencial, pero no determinante, es la holgura económica que posibilite un claro distanciamiento entre los objetivos de largo alcance y los dividendos inmediatos. Esto, porque el problema no radica en la simple ecuación de a mayor prosperidad más integridad política, sino en la existencia de un proyecto social que tenga en la política el conjunto de mecanismos y maniobras para su concreción. En consecuencia, es de resaltar que toda lucha política es una confrontación por el poder y, por ende, por aspirar a controlar el monopolio legítimo de la violencia, y en esa medida las decisiones políticas requieren de una moral. Ser político, *ergo*, no implica solamente querer el poder, es ajustarse a una *ética de la responsabilidad* donde racionalmente se tengan en cuenta los efectos de su acción. Es decir, un experto de la política es aquél capaz de identificar este proceso como un *acto vital*, tanto para él como para los hombres en su alrededor sobre quienes habrá de aplicar sus decisiones⁶.

Actuar con responsabilidad es, invariablemente, “...tener presente las previsible *consecuencias* de la propia actuación...”⁷. Es reconocer que “la política se lleva con la cabeza y no con otras partes del cuerpo o del espíritu”⁸, y por otro lado, que “la política tiene como factor determinante la violencia”⁹. De ahí entonces, el político responsa-

⁵ *Ibid.*, pp. 45-46.

⁶ “¿Qué satisfacciones íntimas puede obtener a cambio y cuáles son las condiciones que ha de tener aquel que emprenda ese camino? A primera vista, proporciona una sensación de poder. La idea de que goza de una influencia para con los hombres, de que es participe en el poder sobre ellos y, en especial, la impresión de manejar los hilos de los trascendentes acontecimientos históricos, lo llevan por encima de lo habitual.” (*Ibid.*, p. 45, cursivas nuestras).

⁷ *Ibid.*, p. 52.

⁸ *Ibid.*, p. 46.

⁹ *Ibid.*, p. 52.

¹ Max Weber, *El político y el científico*. México: Premiá, 1988, p. 14.

² *Ibid.*, p. 14.

³ *Ibid.*, p. 14.

⁴ *Ibid.*, pp. 14-15.

ble es quien tiene claros los fines a alcanzar, así como también los medios para lograrlos. Implicando ello, no “sustraerse al hecho de que para alcanzar fines buenos haya que recurrir, en muchos casos, a medios moralmente dudosos, o por lo menos arriesgados; tanto más cuanto que son posibles las consecuencias laterales moralmente negativas y hasta existe gran probabilidad de que así sea”¹⁰.

En esta tesitura, quien se destine a la delicada organización de lo público tendrá que compenetrarse con un particular código axiológico que, por otro lado, no es igual a las reglas concurrentes en otros ámbitos de la vida social. O como el mismo Weber se pregunta “¿cuál es la relación auténtica que existe entre ética y política? ¿No tiene nada en común la una con la otra, como se suele asegurar? Por el contrario, ¿es cierto que hay una sola ética valedera tanto para la actividad política como para otra cualquiera? Se ha pensado muy a menudo que estas dos últimas afirmaciones se excluyen mutuamente, es decir, que una o la otra pueden ser efectivas, mas no las dos. ¿Acaso existe con absoluta certeza alguna ética en el mundo capaz de imponer normas de *idéntico* contenido a las relaciones eróticas en el plano de lo comercial, familiar y de las profesiones, así como a la relación con la esposa y también con la verdulera, el hijo, el competidor o el acusado?”¹¹

En síntesis, no es posible hablar de una sola y única ética desde donde se orienten las acciones comerciales, políticas, religiosas o familiares; hay una ética política, al igual que existe una ética sexual o una ética mercantil. Tenemos así, una ponderación de ámbitos con exigencias prescritas que marcan y orientan sus formas de organización y comportamiento. Así las cosas, ¿sería correcto afirmar que los políticos de este convulsivo inicio de siglo son más o menos amorales por la degradación del orden social?, y por igual ¿el problema de los *incorrectos manejos* del poder político, eximiéndose de sus fines sociales reside en la disfuncionalidad global de las instituciones, llámense Estado, derecho, Iglesia, burocracia, etcétera? En definitiva no, porque la dificultad percibida en una esfera determinada de acción ciertamente puede tener impactos en otros espacios, pero no es la totalidad social con mayúsculas.

Establecido lo anterior, hemos de considerar en sus justas dimensiones la constitución de una moral propia de la política que rige los ordenamientos y acciones de los hombres de Estado, en cada circunstancia social e histórica.

O lo que es igual, del orden, condición o procedimiento como cada sociedad se plantea su horizonte y cristalización en modelos de organización y ejercicio del poder. De proyecto social y acto político; de fines y medios. El olvido de esta premisa ha implicado que la operación política se justifique a sí misma, transmutándose en una desmedida impunidad del mandato de autoridad, complementada por un exacerbado pragmatismo cuya inercia ha derivado en corrupción y actos de provecho exclusivo del *político* en detrimento de la esfera pública.

En alguna bibliografía de no tan reciente publicación se muestra esta nueva panorámica¹²: son trazados los parámetros sobre los cuales el hábito político se innova, subrayando la pertinencia para discutir este tema más allá de los contornos jurídico-institucionales, e indagando el sentido ético con el cual ahora la política se identifica. Visto así el asunto, nos remite a pensar no solamente en la naturaleza del nexo entre ética y política, sino también a cuestionarnos acerca de su vigencia. Una discusión que aclare si la política en sí ya tiene una moral intrínseca, o si hemos de tener que reflexionar en torno a qué proceder, es el que reclama la política contemporánea y de cada tiempo en específico. Con otros términos estaríamos frente a la consideración de preguntarnos: ¿cuáles son las características o peculiaridades que para cada ciclo histórico manifiesta la política?, rebasando la idea de que la misma es y se *desarrolla* de forma homogénea.

En la lógica de Maquiavelo, el par ética-política es una dicotomía donde el interés capital era separar la razón de la fe, esto es, secularizar el quehacer mundano alejándolo de los preceptos religiosos. Esta misma dualidad en Weber no es irreconciliable, por lo contrario, la firmeza de su integración garantiza la racionalidad de las decisiones políticas *versus* los prejuicios de la ideología y la voluntad. La ética y la política no pueden estar desligadas, porque cuando eso ocurre, los deberes de la autoridad se transforman en infamias y arbitrariedades; o lo que es igual, en descomposición y abusos de poder. En tales referencias, la ola de testimonios que invade al mundo exponiendo la iniquidad

¹⁰ *Ibid.*, p. 52.

¹¹ *Ibid.*, pp. 49-50.

¹² Véase Norbert Lechner, “Los nuevos perfiles de la política. Un bosquejo” en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 130, marzo-abril 1994; Norbert Lechner, “Las transformaciones de la política” en *Revista Mexicana de Sociología*, IISUNAM, núm. 1-96, enero-marzo 1996; Danilo Zolo, *La democracia difícil*. México: Alianza Editorial, 1994, pp. 33-62; Nora Rabotnikoff, “El retorno de la filosofía política: notas sobre el clima teórico de una época” en *Revista Mexicana de Sociología*, 4-92, IISUNAM, octubre-diciembre, México; John Keane, *La vida pública y el capitalismo tardío*. México: Alianza Editorial, 1992, pp. 363-429.

del orden político previo, llámese Estado benefactor, populismo o comunismo, de raíz lo que indica es una forma de la relación entre ética y política, ni mejor ni peor, simplemente una típica interacción sometida actualmente al juicio sumario de otro enfoque. Los modos de hacer política en términos técnicos, hoy como en ninguna otra época, ofrecen altos rangos de especialización, resultando notable la fabricación de mecanismos de organización política cada vez más diversos y complejos; empero, también es perceptible su disposición a independizarse de manera más visible de una concepción de largo aliento. He aquí la esencia de la discrepancia del actual milenio: pugnar por una nueva correspondencia entre lo público y lo privado, asociado a un reajuste en la unidad Estado-Sociedad.

El cometido primordial de los gobiernos del mundo en nuestros días, gira en torno de un compulsivo afán por restaurar la pulcritud institucional. Se forman comisiones parlamentarias, cambian las reglas jurídicas, los cuerpos policíacos endurecen sus acciones, etcétera, todo bajo la égida del Estado de Derecho y, por lo tanto, de la legalidad. Pero aquí es donde los caminos al cruzarse crean un nudo gordiano, ya que al exacerbarse la limpieza institucional la empresa política se convierte en una dilatada razón de Estado. La política se impone a la ética, quebrantando el equilibrio sobre el cual descansaba su virtuosismo. Roto tal contrapeso, el proyecto de largo plazo queda inhabilitado ocupando su lugar medidas de corto alcance conducentes a preservar simple y llanamente la disciplina. El incremento de la resistencia civil y la movilización social en los últimos años en buena parte del planeta, y la obcecación de los gobiernos correspondientes, revelan el grado de separación entre la práctica política y la responsabilidad en la aplicación del poder. Litigio estimulado en buena medida gracias a la constrictiva incursión de la técnica en los espacios reservados para el juicio valorativo. Asentada en una petulante razón instrumental, la técnica instigó un virulento resentimiento hacia la política a lo largo de toda la época de intervencionismo estatal, desilusión que al presente tiene un gigantesco auge¹³, derivando en una exagerada pro-

pagación de los discursos esterilizados de intereses, promotores de los fines de la historia, el fin de la utopía o la crisis de los metarrelatos.

Esbozado lo anterior, el tema central por donde indubitadamente transitará la discusión política de los próximos años, radica en definir las peculiaridades del horizonte o proyecto social a ser desplegado para el futuro, en función del cual los esquemas del poder político institucional, técnico y cognoscitivo se modificarán, reubicando el carácter de los objetivos a perseguir y de los medios para lograrlo. O sea, proporcionar los fundamentos a los actos políticos, para que éstos adquieran sentido y no queden expresados como meras actitudes personales carentes de un origen y un fin, que tienen su razón de ser en la rutina política en sí, siendo éste el argumento para examinar la originalidad de la política en términos de valores, y de su nexos con las instituciones y cuerpos que realizan las tareas administrativas de la riqueza pública. Una acción que, en cuanto tal, precisa de una institucionalización social (objetivación ética de un imaginario social) por encima de los formalismos jurídicos de la representación. Sólo de ese modo, parece ser, es posible la construcción eficaz y creadora de una sociedad racional y responsable.

De igual manera, una aproximación escrupulosa al papel de los escándalos políticos en las nacientes democracias, posibilitará acercarse y tener un conocimiento más profundo de las representaciones que los gobernados se hacen de sus gobernantes, así como del poder político mismo, un examen que coadyuvaría a mejorar nuestra comprensión del nexo entre la cultura política y el entramado institucional. Apuntalada en la reacción de la opinión pública ante ciertos sucesos, queda abierta la interrogante de cuál es el detonante y/o los valores dentro del imaginario colectivo de los gobernados, que los lleva a estigmatizar la conducta de un agente político, y cómo todo ello concita tanto a la reconsideración de sus referentes institucionales de confiabilidad, como de sus esquemas valorativos sobre los cuales construir sus premisas de legitimidad.

¹³ Quede como ejemplo de ello, la "reorganización" actual de las sociedades sobre la base de acuerdos o concertaciones, donde la conflictividad encima de la cual descansaban los Estados, Regímenes o Sistemas políticos premodernos —léase no civilizados—, se diluye o desaparece definitivamente como fundamento de explicación y organización social. Lo que a su vez se ha traducido en una acometida político-ideológica en contra de los actores sociales surgidos al cobijo de los postulados del Estado Asistencialista-Popular, buscando desmitificar el ámbito de la vida pública —sustentado en las creencias y voluntades—, reconstituyéndolo

como esfera racional de negociación mediante los pactos políticos. Una etapa de "hipersecularización" política que está transformando el viejo esquema populista, modificando la constitución, así como las formas de participación política de los actores sociales. (Norbert Lechner, "La democratización en el contexto de una cultura postmoderna" en N. Lechner, (comp.), *Cultura política y democratización*. Buenos Aires: FLACSO-CLACSO-ICI, 1987, p. 257).

Copyright of Cotidiano - Revista de la Realidad Mexicana is the property of Universidad Autonoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.